

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



**JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá D.C., cinco (05) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).

Referencia:	110013335 009 2015 00447 00
Demandante:	JAIME ANDRÉS MURCIA GÓMEZ
Demandada:	NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

(Desistimiento tácito de la prueba y traslado para alegar)

I. ANTECEDENTES

El señor Jaime Andrés Murcia Gómez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la nulidad de la resolución 539 del 20 de octubre de 2011, por medio de la cual la entidad licenció a un grupo de Auxiliares de Policía por haber cumplido a cabalidad con el servicio militar obligatorio; del acta 264 del 24 de febrero de 2014, expedida por la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional; y del acta TM14-139MDNSG-TML-411 del 23 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.

Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y, a título de restablecimiento del derecho, pretende la modificación del porcentaje en que le fue calificada la disminución de su capacidad laboral y el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez o, en caso de no accederse a dicho reconocimiento, el reintegro al servicio activo y el pago de la totalidad de haberes dejados de devengar desde la fecha de retiro.

En desarrollo de la audiencia inicial que se instaló el 13 de febrero de 2019, se dispuso el decreto y práctica de las pruebas solicitadas por la parte actora y encaminadas a obtener: i) copia de la historia clínica del demandante; y ii) dictamen pericial emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en donde se practique el examen de pérdida de capacidad laboral del demandante. El trámite y recaudo de este material probatorio quedó a cargo de la parte actora.

El 29 de abril de 2019 se instaló la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 del CPACA; sin embargo, comoquiera que los oficios fueron radicados

solo hasta el 29 de marzo y 26 de abril, respetivamente, y las entidades requeridas no dieron respuesta, se dispuso su reiteración, con cargo a la parte actora.

Nuevamente el 10 de junio de 2019 se retomó la audiencia de pruebas y, por una parte, como la entidad encargada de allegar copia de la historia clínica así lo hizo, se dispuso su incorporación; mientras que, por la otra, ante la respuesta dada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (fls. 235 y 236), se hizo necesario reiterar el requerimiento encaminado a obtener prueba pericial, pero dirigido ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, a cargo del demandante, quien retiró el oficio pertinente el 9 de julio de 2019.

Mediante proveído del 9 de septiembre de 2019, es decir, dos meses después de haber sido retirado el oficio por la parte actora, se le concedió al interesado un término de 15 días para que acreditara las gestiones realizadas con el fin de obtener la práctica de la prueba pericial decretada en audiencia del 13 de febrero de 2019, so pena de entenderse por desistida la solicitud de la misma, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna.

CONSIDERACIONES

El artículo 178 del CPACA establece que:

<<transcurrido un pazo de treinta (30) días sin que se hubiese realizado el acto necesario para continuar el trámite de la demanda, del incidente o de cualquier otra actuación que se promueva a instancia de parte, el juez ordenará a la parte interesada mediante auto que lo cumpla dentro de los quince (15) días siguientes.

Vencido este último término sin que el demandante o quien promovió el trámite respectivo haya cumplido la carga o realizado el acto ordenado, quedará sin efectos la demanda o la solicitud, según el caso, y el juez dispondrá la terminación del proceso o de la actuación correspondiente, condenará en costas y perjuicios siempre que como consecuencia de la aplicación de esta disposición haya lugar al levantamiento de medidas cautelares.

(...)>>.

El desistimiento fue definido por la Corte Constitucional¹ como <<un acto procesal dirigido a eliminar los efectos de otro acto procesal ya realizado; por tanto, debe ser asumido como una declaración de voluntad al interior del proceso, bien de forma expresa (desistimiento expreso) o de forma tácita (desistimiento tácito)>>.

En esa misma decisión la Alta Corporación también precisó que el

¹ Sentencia C-173 de 2019

desistimiento tácito puede ser entendido como la consecuencia de la falta de interés de quien demanda para continuar con el proceso, pues se estructura sobre la presunción de la negligencia, la omisión, el descuido o la inactividad de la parte.

Entonces, como la prueba pericial encaminada a obtener dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez fue solicitada por la parte actora y, en consideración a la carga de la prueba, a dicha parte le correspondía adelantar el trámite pertinente para conseguirla y asumir los gastos que de ella se desprendieren, fueron múltiples los requerimientos que se le efectuaron en dicho sentido sin que se demostrara la gestión al respecto.

Como consecuencia de lo anterior, en providencia del 9 de septiembre de 2019, se le informó a la parte actora que, si en el término de 15 días no allegada prueba de las gestiones a su cargo se declararía el desistimiento tácito de la prueba, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

Ahora bien, como no existen más pruebas por practicar, esta Sede Judicial dará por terminada la etapa probatoria por haberse agotado su objeto y concederá a las partes el término de diez (10) para presentar sus alegatos de conclusión. En el mismo término podrá el Ministerio Público presentar su concepto si a bien lo tiene.

En consecuencia, el Despacho

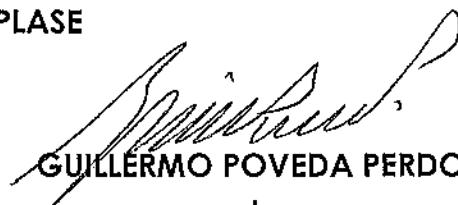
RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR el desistimiento tácito de la prueba pericial encaminada a obtener dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, conforme a las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: DAR por terminada la etapa probatoria, por haberse agotado su objeto.

TERCERO: CONCEDER a las partes el término de diez (10) días, contados a partir de la ejecutoria del presente auto, para la presentación de los alegatos de conclusión por escrito. En el mismo término podrá el Ministerio Público presentar su concepto si a bien lo tiene.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Juez

Referencia: 110013335 009 2015 00447 00
Demandante: JAIME ANDRÉS MURCIA GÓMEZ
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

4

**JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.,
SECCIÓN SEGUNDA**

NOTIFICACION POR ESTADO

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **seis (06) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.

Miryam Yaneth Martínez Cortés
Secretaria